



INFORMACION MENSUAL

Boletín interno del Carlismo

Número 38

Octubre - Noviembre 1974

EL FRENTE UNIDO DE LA OPOSICION POLITICA

El Pueblo es el único protagonista de la lucha contra el estado que le oprime. Este protagonismo se le intenta arrebatar desde distintas posiciones y con distintos procedimientos. Es el Pueblo, en su totalidad, el que está en la oposición al Régimen y desde esta oposición se debate para alcanzar su libertad. Los grupos políticos, son meros instrumentos del Pueblo para esta lucha. Los Partidos, fundamentalmente los populares, quedan responsabilizados ante él para llevar a cabo su promoción y formación política. La primera responsabilidad que concierne a los grupos políticos, es hacerse acreedores de la confianza de la base de que son portadores para ordenar la lucha política. Esta confianza, además, debe ser correspondida con una información clara y objetiva sobre los programas políticos y las tácticas de lucha que cada uno de ellos emplean. De esta forma se evitarán confusiones y se iniciará la construcción de la unidad de toda la oposición.

En los momentos actuales, que asistimos a la decadencia y derrumbamiento del régimen, la oposición parece agitarse y actuar fraccionada presentando una imagen un tanto negativa. La realidad es otra muy distinta. La oposición ha iniciado su alianza. Lo que ahora falta es una información precisa. Nosotros, Partido Carlista, igual que otros grupos políticos, nos proponemos presentar a la luz de la opinión pública, del Pueblo, nuestro plan de actuación aclarando nuestra posición dentro del contexto de la oposición.

LA CRISIS DE LA OPOSICION POLITICA ESPAÑOLA

La oposición política española al Régimen franquista está haciendo crisis. Desde estas mismas páginas hemos venido señalando el proceso acelerado de la crisis del sistema dictatorial que se está produciendo en distintas etapas.

También desde aquí venimos analizando cómo la oposición política desconcertada y dividida, acabaría incubando su propia crisis. Esta crisis, sin embargo, es de signo contrario a la que padece el Régimen. Es una crisis que conduce a la unidad. Del diálogo en la oposición se ha pasado al entendimiento y de éste ya caminamos a la unidad práctica. Porque la unidad es el sentido práctico de la lucha desde la oposición. Una fuerza moderada, pero suficientemente agresiva que sea capaz de solidarizar y hacer converger a todas las fuerzas de la oposición en unos objetivos comunes.

La realidad práctica de la lucha nos demuestra que el primer objetivo, común a todos, es hacer desaparecer el enemigo del Pueblo español. Manifiestese en un orden político, en una represión social, en una explotación económica, este enemigo no es otro que el Régimen y las estructuras que lo soportan. El riesgo a que se ha visto sometida la oposición por causas de posturas intransigentes de algunos grupos de la misma o por operaciones del gobierno para dividirla, se ha visto superado desde el momento en que el diálogo dentro de ella se desarrolla en la búsqueda de unos objetivos comunes a todos: alcanzar la libertad al precio que sea y mantener el campo del ejercicio de la democracia. Nadie renuncia a nada por buscar la libertad política. Todos ganamos.

A este propósito en « IM » del pasado mes de Junio decíamos: « Un diálogo, un entendimiento, una acción de todas las fuerzas democráticas de la oposición, surgirán cuando se parta de unos puntos mínimos comunes para esta etapa de derrocamiento del régimen, pero en esta coalición se integrarán todas las fuerzas que existen sin discriminación alguna ». Sin esta unidad, sin esta acción común de toda la oposición, el único beneficiario será el propio régimen y los grupos de intereses que lo sustentan. Sin esta unidad el Pueblo seguiría soportando la opresión por mucho más tiempo.

Si verdaderamente el obstáculo formal para alcanzar la libertad es la existencia de un régimen que está tiranizando al Pueblo, no podemos permitirnos el lujo de discutir o polemizar sobre posibles programas o ideologías, si antes no hemos hecho desaparecer este obstáculo. Una fuerza, como es la oposición del Pueblo, dividida por posturas intransigentes y a veces dogmáticas de los grupos que encabezan, lo único que conseguiría es mantener al sistema que se les enfrenta. Derrocar el sistema, es, por tanto, el primer paso que todos debemos dar juntos. Si hablamos de oposición democrática también estaremos de acuerdo que una vez desaparecido el obstáculo se deberán abrir todas las libertades. Así ya habremos recorrido un camino juntos y común a todos. Un programa mínimo para evitar precisamente esa disgregación que pueden producir las distintas interpretaciones de la democracia sin que antes la hayamos practicado. Cada uno mantendrá sus programas y sus ideologías, nadie renuncia a sus metas.

Desde hace ya algunos años se viene intentando que todas las fuerzas que se encuentran en la oposición se unieran en torno a plataformas de lucha para que el esfuerzo creciese. Entre las maniobras del gobierno por un lado y las intransigencias de algunos grupos por otro, esta unidad se retrasaba. No ocurre así hoy. Aunque no esté lograda del todo, sí empieza a soldarse en torno a este programa mínimo que puede garantizar los primeros pasos hacia la Democracia. Desde Asambleas democráticas se ha pasado a constituir mesas, plataformas, juntas, en torno a estos mínimos. Al no disponer ni de libertad ni de medios, resulta harto difícil configurar estos instrumentos, naciendo en muchos casos con defectos e inconvenientes como para que sean entidades de pureza democrática o representativas. En la mayoría de los casos surgen por necesidades de lucha. La obligación y responsabilidad de los grupos políticos, fundamentalmente los populares, es reforzar estos instrumentos para que se conviertan en plataformas unitarias de toda la oposición. Así se ha venido haciendo y resultado de ello es la unidad alcanzada en estos momentos. Se debe tender siempre a buscar un instrumento válido y unitario, corrigiendo tantas veces como sea necesario. Con un programa mínimo y común para todos, se evitará que cada grupo en su lucha no contradiga estos principios de unidad tan elementales como tan necesarios para desmontar el sistema dictatorial. Cada grupo podrá interpretar este programa mínimo en función de su propia ideología y así deberá expresarlo; pero nunca contradecirlo en su acción. Aquí radica la razón de que este programa debe ser mínimo. Cualquier pretensión de abarcar toda la problemática, nos llevará a la dispersión.

SENTIDO DE LA JUNTA DEMOCRÁTICA

El Partido Carlista, que tiene expuestos ante la opinión su programa político e ideológico, así como su línea táctica, últimamente difundida, ha decidido integrarse en la Junta Democrática de España al considerar que ésta puede y debe ser un instrumento unitario al nivel de la lucha contra el Estado totalitario. El Partido Carlista mantiene su presencia activa en la mayoría de las plataformas unitarias existentes en todo el estado español, y su lucha unilateral en todos los frentes abiertos ante la represión. Esta presencia y esta actuación a distintos niveles y frentes no se hace incompatible con su integración en la Junta Democrática de España, sino que al contrario, considera fortalecida la unidad de toda la oposición.

Al tratarse dicho organismo de una Junta Democrática, el Carlismo interpreta que cualquier programa presentado por la misma es susceptible de cambio, evolución y perfeccionamiento para que puedan concurrir todos los grupos y sectores de la oposición. Por ello, el Partido Carlista invita, pide y exige, que todas las fuerzas de la oposición que se debaten frente al régimen fascista deben concurrir en un instrumento unitario al máximo nivel, llámese como se llame, para ir creando las estructuras de un gobierno provisional que en la primera etapa después de la desaparición de la dictadura, pueda garantizar el ejercicio de la democracia.

Creemos que una vez constituida la Junta Democrática de España, con todos los defectos que implica el nacer dentro de las dificultades actuales, debemos hacerla nuestra y fortalecerla para que sea una realidad para la lucha del Pueblo. Por otra parte no reconocemos a esta Junta más soberanía que la que le den la representación de cada uno de los grupos integrados en ella. Si la Junta Democrática de España no cumpliera el papel para el cual ha sido creada, el Partido Carlista sería el primero en condenarla y separarse de la misma. Hoy quedamos comprometidos para hacerla posible con la incorporación de todas las fuerzas de la oposición sin discriminación alguna.

Como principio democrático toda Junta, Mesa, Plataforma, Asamblea o cualquier instrumento unitario al nivel que sea, debe gozar de su plena soberanía, sin dependencia alguna de organismo superior. De esta forma, el instrumento a nivel Estado, podrá ser elemento o campo donde se efectúe el pacto entre todas las fuerzas de la oposición, a nivel nacional, para alcanzar la etapa en la cual se pueden practicar la democracia y las libertades ciudadanas, donde el Pueblo en su libre ejercicio irá decidiendo por sí mismo cual es el camino que debe seguir.

El Gobierno del general Franco se ha puesto nervioso ante estos hechos y fundamentalmente por la superación, por parte de la oposición, de la crisis de fraccionamiento que padecía.

POSTURA DEL PARTIDO CARLISTA

« El Partido Carlista por el hecho de incorporarse a la Junta Democrática de España, no modifica nada de su programa actual de actuación y de lucha para realizar el estado federal, y mantiene sus presupuestos ideológicos para alcanzar las metas de un socialismo de autogestión sindical, político y territorial. »

Para mayor argumentación y explicación de la postura que en la actualidad lleva a cabo el Partido Carlista, reproducimos a continuación las principales conclusiones derivadas del análisis efectuado sobre la línea táctica:

« Al analizar las cinco tendencias políticas anteriores, el Partido Carlista llega a las siguientes conclusiones:

* Las tendencias de derecha o continuistas del régimen no son aceptables, precisamente porque van hacia una mayor radicalización del mismo régimen. Así, en el extremo opuesto la tendencia revolucionaria exclusivamente violenta tampoco puede ser aceptable porque no tiene suficiente fuerza para ser capaz de realizar el derrocamiento del Régimen. Ambas tendencias son hoy o bien inaceptables o bien impracticables.

* La tendencia de derecha liberal excluyente de los movimientos de izquierda revolucionaria, como la tendencia Frente Popular excluyente de los sectores liberales, adolecen ambas de un doble defecto. En primer lugar dividen la oposición dando así pie a una bipolarización de signo contrario dentro de la misma oposición al régimen que permite luego a éste mantenerse arbitrando por la fuerza el conflicto. En segundo lugar, porque en los momentos actuales, les sitúa en un planteamiento excluyente que les resta eficacia para el derrocamiento del Régimen, pretendiendo ya de antemano eliminar un sector conservador liberal o un sector revolucionario de izquierda, sin permitir previamente el juego de las elecciones libres y democráticas del Pueblo, único árbitro válido de la misma oposición.

* Por tanto se presenta hoy la alternativa de un Frente Común de toda la oposición, como la solución más aceptable, porque permite agrupar a toda la oposición en unos objetivos comunes sin caer en una bipolarización de derecha-izquierda que retrasaría el derrocamiento del régimen. Asimismo permite asegurar un juego democrático en un plano de igualdad en el que todas las tendencias puedan manifestarse libremente y no verse eliminadas de antemano. Esta postura de Frente Común presupone dos condiciones. Primeramente un respeto de las posturas ideológicas y de las metas de futuro de cada grupo de la oposición que participa en el Frente. La segunda, como consecuencia de la anterior, que el Frente Común se base exclusivamente en unos puntos comunes a todos y que no contradigan las opciones a largo plazo de ninguno. Así en el futuro, establecidas y garantizadas estas libertades democráticas, cada partido podrá libremente exponer su ideología y programa para que el Pueblo pueda escoger entre las distintas opciones presentadas.

* Mientras se alcanzan estos objetivos las fuerzas que tienen una mayor afinidad entre sí, pueden realizar alianzas con tal que no contradigan el Frente Común democrático. Ejemplo de una de esas uniones es la propuesta por el Partido Carlista de realizar un Frente Democrático Revolucionario donde concurren las fuerzas que tienen como ideal común un socialismo pluralista. Este planteamiento fortalece la dinámica del Frente Común de toda la oposición.

* Dentro de su planteamiento táctico, el Partido Carlista mantiene su ideología y supedita la táctica a su ideal de realizar un socialismo en lo económico, en lo regional y en lo ideológico, dentro de una concepción de autogestión global. Considera además el Partido Carlista que la táctica actualmente como más idónea puede ser modificada según las circunstancias o la configuración de la oposición. Si estima que el Frente Común es hoy el más viable es exclusivamente porque cree que en las circunstancias actuales permite alcanzar una eficacia práctica y avanzar hacia el ideal del Partido Carlista y de todo el Pueblo Español. »

El Partido Carlista espera que cada uno de los grupos o sectores de la sociedad que componen los diversos organismos unitarios, principalmente la Junta Democrática de España, se definan y expongan con plena claridad su táctica, para que el Pueblo deposite su confianza en estos instrumentos de lucha y en todos aquellos partidos, grupos o personas que disponen de un campo de responsabilidad en la lucha política.

EL EJERCITO, INSTITUCION MIMADA DE TODOS

Desde hace un tiempo a esta parte venimos observando, tanto desde los políticos de la derecha como desde algunos partidos de la izquierda, desde dentro del Régimen como desde fuera, una adulación desmedida hacia esta Institución. La mayoría de estas alabanzas tienen su origen en el temor o miedo que parece producir el Ejército a todos los políticos, al considerarle como el árbitro de todas las polémicas o decisiones que puedan influir en el futuro de España. Que el Ejército disponga de la fuerza de disuasión no quiere decir que pueda disponer

de la fuerza de coacción que muchos le quieren atribuir.

Al recibir el Ejército por parte de la sociedad esa serie de consideraciones desmedidas, éste se sitúa fuera de ella, naciendo el complejo de tutela, cuando debe ser parte de la misma sociedad y recibir de ella la inspiración ideológica y las exigencias de su misión. Por otro lado es un grave error situar también al Ejército fuera del contexto político, como si nada tuviese que ver con la dinámica democrática del pueblo y sí haciéndole responsable de la ejecutoria totalitaria del régimen actual. El Ejército no puede oponerse a la lucha reivindicativa del Pueblo, pues, o bien se transfor-

maría en el instrumento de los intereses de una clase, oligarquías socio-económicas y políticas, o bien en el propio poder mediante la implantación de una dictadura militar.

El ministro del Ejército recientemente ha dicho: « Porque el Ejército debe fundirse con el pueblo, de suerte que éste vea en él su propio Ejército... Las Fuerzas Armadas, firmemente unidas en el servicio a España y asentadas en una disciplina consciente, reflexiva y espiritual, en vigilante custodia de lo permanente, se esfuerza, día a día, tanto en el aspecto moral como en el de su preparación profesional, en estar siempre dispuestas a cumplir la misión que nues-

tras leyes les asignan». Todo esto tan hermoso puede sonar a música celestial cuando se observa al mismo tiempo que el Pueblo es privado de sus más elementales libertades y derechos; que el país se viene abajo económicamente a causa de una administración y una corrupción dirigida por grupos que constantemente intentan utilizar al Ejército como pantalla protectora; que más de dos millones de españoles se encuentran fuera de su patria por no tener que comer y ahora están creando riqueza para otros países; que al Ejército se le pretende hacer cómplice de todo esto y hasta se le hace intervenir en la administración de justicia a través de tribunales especiales para juzgar asuntos que le bastaban a la jurisdicción civil.

El Carlismo no echa piropos al Ejército porque sabe que ante el pueblo este lenguaje oculta cierta falsedad. El Carlismo exige del Ejército que ocupe el puesto que le corresponde y apoye los intereses del Pueblo que deben ser los suyos. Y esto es lo dicen los que en sus constantes luchas por la libertad del Pueblo supieron poner en pie de guerra ejércitos de voluntarios, dando ejemplo de disciplina, de valor y de lo que puede ser un Ejército del Pueblo, sin caer en demagogias o en servidumbres de intereses económicos o sociales. Por esto, el Ejército no puede estar nada más que al lado del Pueblo, si no quiere volver a ser un Ejército de aristócratas, de ricos señoritos. En los momentos actuales su papel puede ser de fuerza, pero también puede ser enormemente político, si adquiere capacidad de análisis y emplea su fuerza para que el Pueblo pueda alcanzar su libertad sin traumas ni alteraciones que vayan más lejos de lo preciso para el cambio.

EL 29 DE SEPTIEMBRE DIO MIEDO

Y más que miedo, pánico fue lo que produjo a la oligarquía española el avance político del 29 de Septiembre en Portugal. Los mismos periódicos, los mismos autorizados portavoces del más liberal aperturismo que se emocionaron hondamente con el formalismo democrático surgido del 25 de Abril, tocan ahora a rebato, llenos de nerviosismo, para organizar a la derecha española frente al empuje de la izquierda.

El hecho de que la dudosa figura de Spínola fuera tan aireada y celebrada desde un principio por este sector, era una muestra clara de que en Portugal había también una oligarquía que trataba de asegurar sus intereses con el general del monóculo. Los graves momentos vividos por Portugal en los últimos días de Septiembre no son de la exclusiva responsabilidad de Spínola, aunque él jugó un importante papel con su frívola llamada a la «mayoría silenciosa». Toda la derecha atemorizada hubiera sacado partido del golpe preparado por los elementos residuales del fascismo.

Pero la reacción del Movimiento de las Fuerzas Armadas y del pueblo vigilante ha sido inequívoca. La conspiración de la derecha ha servido para consolidar la democracia y la libertad y para consagrar de nuevo el protagonismo de la vida política portuguesa por parte de los militares unidos al pueblo. La jornada de trabajo voluntario organizada en todo el país para celebrar la nueva victoria sobre el fascismo, ha demostrado el entusiasmo con que la inmensa mayoría de los portugueses afrontan la nueva etapa histórica de su patria. Al mismo tiempo que ha hecho temblar a los máximos representantes de la oligarquía,

huídos a toda prisa buscando refugio en España.

Portugal, su clase trabajadora y su pueblo, pueden mirar el futuro con optimismo. Tienen la guardia en alto y están dispuestos a afrontar los sacrificios necesarios para construir una nueva economía y una nueva sociedad. De esta forma podrán impedir que se cumplan las intenciones del capitalismo indígena, de controlar estrechamente la nueva democracia o convertir el país en un nuevo Chile.

EL PUEBLO GRITA DESDE LAS CARCELES

La lucha contra el régimen franquista no se detiene ni en las prisiones. En los meses de Septiembre y Octubre dos centenares de presos políticos, repartidos en diez cárceles y penales, han mantenido una larga huelga de hambre, apoyada con acciones de otro tipo, en defensa de sus reivindicaciones.

Esta cadena de luchas arranca de la prisión de Torrero, en Zaragoza. El 30 de agosto los presos políticos recluidos allí firmaron un documento en el que denunciaban la falta de condiciones mínimas existente, ya que se trata de una cárcel preventiva que no está preparada para cumplir condena, y el régimen terrorista al que les tienen sometidos el director y un grupo de funcionarios. Dentro de este terrorismo oficial se encuentran las provocaciones continuas y el intento de enfrentar a los presos políticos con los comunes, tratando de presentar las reivindicaciones de aquéllos como reclamación de privilegios.

Esta situación desembocó en una reyerta en la que algunos comunes amenazaron a los políticos con objetos punzantes, ante la pasividad de los funcionarios. Inmediatamente un grupo comenzó la huelga de hambre a mediados de septiembre.

El 29 la huelga salta a Basauri y Martutene (S. Sebastián) y en días siguientes se extiende a Pamplona, Carabanchel, Segovia, Burgos, Santofña, Lérida y Jaén. Aun que el móvil central es la solidaridad con los compañeros de Zaragoza, en cada penal se añaden reivindicaciones propias: derecho a usar el eúskera en las conversaciones, mejores condiciones de vida, juicio inmediato para algunos presos que esperan desde hace 16 meses, retribución justa por el trabajo realizado... Pero lo que se reclama en Zaragoza es mucho más elemental: que la dirección garantice la integridad física de los reclusos, amenazada por ataques y provocaciones continuas; que se permita la entrada de revistas y libros legales; que se implanten en la cárcel de Torrero las mínimas condiciones existentes en los penales habilitados para cumplir condena.

Esta huelga de hambre, extendida rápidamente por toda España, ha sido una muestra más de la necesidad de luchar para conseguir unas elementales reivindicaciones. Y de la posibilidad de luchar en cualquier situación, por difícil que sea, porque estos 200 compañeros recluidos en las cárceles fascistas sabían desde el principio que la más brutal represión caería sobre ellos: celdas de castigo, imposibilidad de redimir penas por el trabajo, vejaciones, incomunicación.

TESTIMONIO DE LOS PRESOS

Al propio tiempo la lucha ha servido para poner al descubierto la inhumanidad del sistema penitenciario franquista. Igualmente ha quedado denunciada ante

todos la maniobra represiva de dividir a políticos y comunes y separar de todas las formas posibles a los políticos entre sí. Un párrafo del documento elaborado por los huelguistas de hambre de Zaragoza y hecho llegar de forma clandestina al exterior es suficientemente expresivo: «A través de premios —rebajas de condena, mejores puestos...— y castigos, los funcionarios dividen constantemente a los presos, utilizando la violencia que engendra el encierro, la feroz represión sexual, para enfrentar a unos reclusos con otros, incluso físicamente. A la vez, en la mayoría de los casos son funcionarios los que, aprovechándose de la depauperación humana creada por el sistema penitenciario por ellos mantenido, alimentan y controlan los mercados de alcohol, drogas u homosexualidad. Y para asegurar el control de estos negocios, así como el del conjunto de la cárcel, disponen no sólo de todos los medios legales que el sistema pone en su mano, sino también, y sobre todo, de la red de chivatos y matones y de las palizas sistemáticas».

En estas condiciones la lucha unitaria de los presos políticos, en la que han participado diversas organizaciones políticas, así como compañeros de nuestro Partido, adquiere el valor de símbolo de un pueblo que cada vez ve más claro su camino, por encima de las concretas reivindicaciones planteadas y del triunfo obtenido.

EL GRUPO "JUSTICIA DEMOCRÁTICA" DENUNCIA LA APERTURA Y EL ESTADO FASCISTA

El grupo de magistrados, fiscales, jueces y secretarios de Administración de Justicia que integran «Justicia Democrática» ha dado a conocer un documento anunciando que se adhiere a la declaración de la Junta Democrática de España. Este conjunto de profesionales de la Administración de Justicia, manifiestan que se niegan «a aceptar la supuesta licitud del franquismo, sin querer acudir a la fácil coartada de limitarse a la ejecución de disposiciones emanadas de poderes arbitrarios, y sin querer admitir la dosificada selección de los funcionarios judiciales propicios que el franquismo ha hecho y hace para el ejercicio directo de sus necesidades represivas...»

El Régimen ha reaccionado operando en dos vertientes: «apertura» para la conservación del sistema y continuismo en la monarquía de D. Juan Carlos de Borbón. Los hechos represivos que acompañan a estas operaciones y el carácter retrógrado de los proyectos de ley que las secundan, desmontan cualquier confianza sobre la verdadera finalidad de las mismas. Muestra del propósito real de la operación es la liquidación de la independencia del poder judicial que se persigue con el proyecto, en trance de aprobación, de la «Ley Orgánica de la Justicia».

La importancia de esta postura de Justicia Democrática radica, más que en los propios juicios políticos, en el hecho sintomático y esperanzador de que un grupo de profesionales tan ligados a la estructura del Régimen, como son los que pertenecen al poder judicial, sean conscientes de la necesidad de un proceso democrático y denuncien la corrupción social y política que supone el estado fascista y represivo, donde la independencia de la justicia está suplantada por la violencia indiscriminada de la dictadura que priva al pueblo español de los más elementales derechos ciudadanos.

UN ATENTADO, UNA MANIOBRA DEL GOBIERNO Y UNA HOMILIA

Entre las noticias de la prensa, las notas oficiales de la Dirección General de Seguridad y las distintas versiones que circulan en los medios políticos del país, el ciudadano medio español ya no sabe que creer. Nos referimos al atentado, ya famoso, de la calle Correo de Madrid.

Aunque la repulsa al hecho en sí ha sido total, caeríamos en tópico al salir ahora condenando el acto. No hace falta que lo hagamos de una manera oficial porque desde hace mucho tiempo la postura de nuestro partido es clara, tanto en la forma de proceder, como en la constante denuncia que viene haciendo de los actos de «terrorismo» y subversión que se practican desde el propio régimen contra el Pueblo.

Lo que sí creemos importante es hacer resaltar este hecho como elemento de utilización política. El gobierno franquista ha aprovechado la oportunidad «muy oportuna», casi como preparada, para montar una campaña contra aquellos que en ese momento más le molestaban en un orden político. Si el acto en sí es condenable, más lo es que sea utilizado como arma para herir a los que, aun sin tener nada que ver con ello, son enemigos del régimen. Casi parece montado expresamente para ello. Toda la operación policíaca llevada a cabo en torno al atentado ha sido burda y de poca calidad. La precipitación de la policía para encontrar un culpable ha dado lugar a graves y grandes contradicciones.

A este propósito reproducimos un fragmento de la homilía del padre González Ruiz del 6 de Octubre en la catedral de Málaga y que como consecuencia de la misma fue sancionado con cien mil pesetas de multa:

«Y así, al mismo tiempo que hemos gritado o hemos debido gritar contra el bárbaro acto de terrorismo que en la capital de la nación costó la vida a un grupo de personas, igualmente gritamos contra la agresión de que una pacífica manifestación de obreros despedidos en Valladolid o de habitantes del pueblo sevillano de Carmona han sido víctimas recientes por parte de la «fuerza pública». Según la información, que públicamente se nos ha dado, en ningún caso hubo una alteración del orden público como para exigir víctimas de muertos o heridos. ¿Por qué, pues, se insiste tanto en acusar y presentar a los presuntos autores del criminal atentado de la calle de Correos de Madrid y no se nos dice que las autoridades superiores han tomado rápidamente las medidas necesarias para castigar a los autores, no presuntos, sino reconocidos, de una agresión mortal o, al menos muy peligrosa, de la que han sido víctimas un grupo de ciudadanos determinados?»

«Hablar así no es nada fácil, pero, como decía San Pablo, ¡ay de mí si no evangelizara!»

«Un día —siempre cercano— nos hemos de presentar ante el tribunal de Dios y nos va a repetir la pregunta que, desde el comienzo de la historia, está haciendo a la humanidad: "Caín, Caín, ¿dónde está tu hermano Abel?". Para nosotros, todas las víctimas de la injusticia tienen un mismo nombre: Abel. Y todos los agresores injustos, sea cual fuere su ideología o su instalación en el mundo del poder y de las riquezas, son llamados igualmente con un solo nombre: Caín.»

Igualmente, por su valor testimonial de primera mano, reproducimos algunos fragmentos de la carta-declaración en-

viada por el escritor Alfonso Sastre al Comisario Jefe de la Brigada Social, antes de entregarse voluntariamente, y que la publicó «Diario Popular» de Lisboa.

«Mi casa fue literalmente destruída: desde discos destrozados y pisados por sus agentes, hasta la ropa de mis hijos desparramada, mis máquinas de escribir (soy escritor) consideradas material terrorista, etc., etc. Mi apartamento de Miraflores fue asaltado con gran aparato por la Guardia Civil, puerta violentada... para encontrar allí mi modesto trabajo intelectual de dos años: un libro... sobre la imaginación. Parece que usted no contó esto en sus conferencias de prensa. Ciertamente no se trata de una violencia. La destrucción de, por ejemplo, mi vida no es una violencia: forma parte del orden.»

«Las amenazas de muerte de que soy objeto (y que nos obligaron a construir refugios y a organizar una precaria defensa) tampoco constituyen violencia: son orden.»

«Habiendo sido detenida mi mujer el día 16, hoy, día 30, nadie pudo verla aún, ni fue posible prestarle la menor asistencia. ¿Qué hicieron Vdes. de las 72 horas legales? ¿Qué hicieron de ella? Son Vdes. unos desvergonzados violadores de su propia legalidad. Todos los derechos humanos son escarnecidos por Vdes.; pero eso, como se sabe, no es violencia, es orden.»

UNIVERSIDAD: UNA TACTICA QUE NO ENGAÑA

Como estamos en temporada de apertura nuestra clase política se disputa el privilegio de pronunciar frases altisonantes que puedan ocupar los grandes titulares de la prensa. En esta línea liberal y concisiva el ministro de Educación, Martínez Esteruelas, decía el 30 de Septiembre ante la Junta Nacional de Universidades: «No queremos tomar decisiones ignorando lo que piensan profesores y alumnos». El 21 del mes siguiente se decretaba desde las páginas del BOE la representación estudiantil. Naturalmente, sin consulta previa alguna a profesores o estudiantes.

¿Por qué no ha realizado esta consulta el ministerio de Educación? ¿Por qué no ha aprovechado la coyuntura para una concesión demagógica que hubiera validado sus planes para la Universidad? Evidentemente no podía hacerlo porque hubiera sido tal el cúmulo de contradicciones y ambigüedades denunciadas en el contenido de este decreto, que todo se hubiera ido por los suelos.

Ante este problema de la representación estudiantil nos encontramos con una situación muy similar a la que se produce en el plano político general, con el enfrentamiento entre democracia y apertura. El gobierno pretende ofrecer con sus medidas liberalizantes un sustitutivo de la verdadera representación estudiantil; ofrece una serie de concesiones, a modo de trapo rojo que distraiga la atención de las masas estudiantiles del verdadero objeto de la lucha, que en estos momentos está centrada en el derecho a las libertades democráticas en el interior de las Universidades y centros de enseñanza.

Es situándolas en el corazón de esta táctica disuasiva, como el Régimen pretende aplicar a la Universidad las normas recientes. Resulta que ahora los estudiantes podrán elegir sus representantes; pero esta elección directa se reduce al nivel de curso y sin garantía alguna de que se respeten la libertad de reunión o de expresión en el interior de las Uni-

versidades. ¿Y de la amnistía universitaria, qué? ¿Y de la participación paritaria de profesores numerarios, no numerarios y estudiantes en los órganos de gobierno, qué? Los burócratas de la «educación nacional» eluden pudorosamente los temas alegando que no hay nada estudiado sobre el particular.

En realidad lo que ocurre es que el fascismo retrocede más y más en las Universidades, como en todos los sectores de la vida del país. Y pretende cubrir este proceso de regresión con concesiones «aperturistas». Lo que ocurre también es que los estudiantes tienen muy claro el camino a seguir. No será aceptable jamás una legalización de la representación estudiantil que no vaya acompañada por una inmediata amnistía universitaria, por una reforma radical del represivo Reglamento de Disciplina Universitaria y por una garantía definitiva de los derechos de reunión, expresión, asociación, etc.

Estas concesiones nunca las hará el fascismo. Representan el principio de una Universidad capaz de asumir plenamente su papel crítico y revulsivo en la sociedad, capaz de poner en cuestión su papel de aparato de clase en la sociedad capitalista. Y entre esto y las demagogias aperturistas de un régimen que retrocede continuamente hay demasiada diferencia.

UN AÑO DE CRIMENES EN CHILE

El once de Septiembre se ha cumplido el primer aniversario del brutal golpe fascista que acabó en Chile con el régimen democrático y socialista de la Unidad Popular. El puñado de militares que se alzó con el poder ha mantenido desde entonces una de las dictaduras más salvajes y violentas que se han conocido en la historia.

Al bombardeo del Palacio Presidencial de la Moneda y al asesinato del presidente Salvador Allende, siguieron inmediatamente los asaltos a las fábricas donde los obreros ofrecieron resistencia, las matanzas en masa de izquierdistas o de simples ciudadanos, las purgas sistemáticas en los centros de trabajo, los bombardeos de barriadas populares donde se suponía que la dictadura no iba a encontrar apoyo... El rostro sanguinario del fascismo ha conocido hasta el último rincón de Chile.

Desde entonces son innumerables los crímenes y las vejaciones de todo tipo que la Junta Militar de Pinochet ha sembrado sobre la tierra del país andino. Las cárceles están repletas, en los campos de reclusión se amontonan millares de presos como si fuera ganado, y todo vestigio de legalidad democrática o de libertades públicas ha sido cuidadosamente extirpado.

SE INDEMNIZA AL IMPERIALISMO

¿A quién sirven Pinochet y sus sicarios? ¿Quién se beneficia de este inmenso crimen que es ahogar en sangre la esperanza y el progreso de todo un pueblo? En primer lugar, la oligarquía chilena, los truts comerciales y financieros de los Edwards y otros grandes capitalistas, que han recuperado íntegramente sus inmensas propiedades y su poder. Y paralelamente, el imperialismo USA, que ha visto satisfechas todas sus demandas. La Kennebec y la Anaconda, expropiadas por Allende con el voto unánime del Congreso en razón del robo sistemático de riquezas chilenas que habían practicado, han sido indemnizadas con más de 1.250 millones de dólares. Es un ejemplo, entre

muchos que se podrían señalar. El hecho es que la Junta fascista de Pinochet ha dictado una nueva legislación sobre inversiones extranjeras que convierte a Chile en el paraíso del imperialismo capitalista. Estados Unidos, Alemania, Japón, han anunciado ya inversiones por valor de miles de millones de dólares, aprovechando la oportunidad y las garantías que les ofrece la Junta de que podrán entrar a saco en los recursos naturales del país, sin ser molestados. A este servilismo se une el control sobre la clase obrera, fuertemente presionada por el paro creciente, la inflación del 250 y el 300 por cien y la imposibilidad de contar con una mínima organización reivindicativa legal.

Estas óptimas condiciones con que el imperialismo se encuentra hoy para extraer el máximo beneficio de sus inversiones en Chile bastarían por sí solos para explicar la intervención decisiva de la CIA en el golpe del año pasado. Pero las cínicas declaraciones de William Colby, director de la organización de espionaje yanqui, además de demostrar la responsabilidad directa del « mago » Kissinger en el hecho, han revelado que los 11 millones de dólares invertidos en el derrocamiento de Allende y la elevación del fascismo al poder, tenían otra fina-

lidad: experimentar sobre las nuevas técnicas norteamericanas para derribar a un gobierno no grato.

Con esta confesión, que no hace sino confirmar lo que todas las fuerzas democráticas habían denunciado el año pasado, queda definitivamente aclarado el papel de los Estados Unidos en el mundo: proteger sus intereses económicos, políticos y estratégicos de la forma que sea, allanando la soberanía nacional de otros pueblos, asesinando presidentes demócratas, derribando gobiernos y entronizando juntas militares y fascistas. Para los yanquis todo está justificado —en nombre de la « democracia » y el « liberalismo », claro— si sirve a sus intereses y a su posición dominante en el mundo.

Una vez restablecida « la normalidad » son ya los gobiernos títeres los que hacen la política del imperialismo, presentándola como « política nacional ». Según Amnistía Internacional, organización nada sospechosa de parcialidad, entre 5.000 y 30.000 personas han sido asesinadas por el régimen Pinochet y otras 40.000 están detenidas. Era esto lo que necesitaba el imperialismo para poder restablecer tranquilamente toda clase de facilidades de explotación económica en Chile.

Y sin embargo los fascistas chilenos tienen miedo. Su única razón es la fuerza. Su único apoyo en el país son los policías. Su única justificación en el poder es el servilismo con que venden Chile al gran capital extranjero. Por eso la represión no cesa, por eso cada medida de propaganda —como el levantamiento del estado de guerra— va acompañada de otra de signo contrario —la imposición del estado de sitio—. Y por eso siguen los asesinatos de militantes. Miguel Enríquez, secretario general del MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionaria) ha caído recientemente en heroico combate con fuerzas muy superiores de la Junta fascista. Y el general Carlos Prats ha sido vilmente asesinado en Buenos Aires, junto con su mujer, por medio de una bomba colocada por los servicios secretos de Pinochet. No es que a la Junta chilena no le preocupasen las memorias que el general Prats estaba preparando, pero le molestaba sobre todo una conciencia militar limpia, claramente alineada con el pueblo. Y esto, frente a las manos de los militares fascistas que chorrean sangre de ese mismo pueblo, bastaba para ser una acusación.

LUCHA POPULAR

PROXIMAS ELECCIONES EN LOS SINDICATOS OFICIALES

Para el próximo mes de mayo se han anunciado elecciones sindicales que pueden representar la renovación de casi la totalidad de los cargos sindicales actuales.

El Sindicato Vertical del estado franquista sigue siendo un aparato burocrático del régimen y al servicio de los intereses de los patronos capitalistas. Su mecánica « democrática » no ha variado aunque pretendan presentar estas elecciones como una evolución del procedimiento para elegir los cargos sindicales. Como todas las estructuras del sistema, el Sindicato no puede transformarse por el anuncio de unas elecciones que renueven los cargos sindicales en casi toda España. No puede transformarse en un mecanismo democrático porque se sitúa dentro de un régimen totalitario donde no existe libertad. Este órgano « sindical » seguirá siendo un instrumento de los intereses del estado y de los grupos económicos.

Suponer que el Sindicato oficial puede ser utilizable como órgano de defensa de los intereses de la clase obrera, es no conocer la naturaleza fascista de los mismos. La clase obrera plantea sus reivindicaciones fuera del marco del sindicato oficial. A pesar de él su lucha se desarrolla con solidaridad y eficacia.

Existen sin duda alguna, cargos sindicales que son elegidos directamente por la base, o que pueden ser elegidos. Estos cargos quedan localizados a nivel de enlaces y jurados y su actividad es controlada por los patronos que proceden a la denuncia de los mismos, en cuanto creen que se han extralimitado en sus « funciones », o sea, en cuanto presentan

la lucha por las reivindicaciones de la clase a la cual pertenecen.

No obstante, en la lucha obrera no debe desperdiciarse la oportunidad de ocupar aquellos puestos que no representan ninguna subordinación y sean aptos para ser utilizados en favor de la causa obrera. No puede establecerse un criterio general en este aspecto, pues mucho dependerá de las zonas y de las circunstancias que puedan concurrir. Como norma general, sí puede establecerse la que nos orienta hacia la lucha dirigida hacia el cambio total del sistema que representa la transformación de un sindicato oficial y verticalista, por un sindicato democrático independiente del estado.

El Partido Carlista, lo mismo que en su día dio normas para abstenerse de participar en las elecciones municipales oficialmente, en este caso las establece er el mismo sentido, pero haciendo la salvedad que se pueden utilizar en circunstancias específicas que permitan a sus militantes poder desarrollar una labor en favor de la clase obrera y sus reivindicaciones.

EL TRIUNFO DE LOS M.I.R.

La huelga llevada a cabo por los Médicos Internos y Residentes (MIR) de las clínicas de la Seguridad Social, ha sido un paso adelante en la concienciación de la clase médica, el espíritu solidario de lucha y la unión frente a la política del Instituto Nacional de Previsión. Los resultados han sido positivos y han aportado una experiencia para continuar en la batalla por la socialización de la medicina. En esta huelga destacan dos aspectos: la lucha concreta frente al INP y el esfuerzo paralelo para de-

nunciar los intereses de la medicina privada.

Conviene apuntar brevemente y de una manera esquemática el panorama general de la asistencia sanitaria en España, dominada por una falta de racionalización y organización y por una mentalidad antisocial que mantiene la clausura medicina privada, dentro del siguiente marco: insuficiente asistencia médica a la población del país; correcta proporción de médicos por número de camas; escasa proporción de número de camas por habitante, con un índice de 1/800 habitantes, que es inferior al fijado por la Organización Mundial de la Salud.

En este contexto sufren las consecuencias pacientes y médicos. Pero dentro de estos últimos se puede considerar que los MIR son, a la vez, privilegiados y explotados. Privilegiados, porque de cada cien nuevos médicos, sólo 25 logran entrar en un hospital o clínica de la S.S. para hacer especialidad o perfeccionar conocimientos con unos medios aceptables de trabajo. Pero de todas formas ese 25 por ciento es muy relativo porque sólo en las Facultades de Medicina de las Universidades Autónomas de Madrid y Barcelona es obligatorio hacer el internado rotatorio, mientras que en el resto de las facultades, que son las de mayor número de alumnos, no se hace, lo cual significa una situación discriminatoria. Esa discriminación se agudiza porque esas universidades autónomas se han reservado los mejores centros sanitarios de sus respectivas ciudades, y para colmo, en el caso de Madrid, a la Autónoma van los que residen en la zona Este de la ciudad, donde abundan los barrios más capitalistas. Es decir, que desde el principio ya se establece una

discriminación social. Para el resto de nuevos médicos, es decir, el 75 por ciento de los que acaban la carrera, tienen que buscar su futuro haciendo sustituciones, esperar una oposición o buscar pequeños empleos siempre mal pagados.

La situación real de los MIR en sus centros de trabajo es la que les confiere su carácter de explotados. Ellos son los que llevan el grueso de trabajo: visitas, guardias, etc. Ya que, conforme se sube en el escalafón, se trabaja menos y más cómodo, como es el caso de los ayudantes y jefes de servicio que evitan su atención en la S.S. para dedicarse a las consultas privadas. Prácticamente sin horario fijo y responsabilizados de casi todo el peso de la asistencia médica a los asegurados, los Internos cobran unas 11.000 ptas. mensuales y los Residentes de 2.º y 3.º año, 14.400. Pero, además, el INP considera que les hace un favor porque « no están trabajando sino aprendiendo » y en virtud de esa falsedad les hacen firmar un contrato de docencia, no laboral, que además puede rescindir a su gusto.

Hasta 1974 para admitir a un nuevo MIR en un centro de la S.S., la selección la hacía un equipo de médicos de ese centro, que mandaba la propuesta al INP para su aprobación. Pero en el pasado mes de febrero surgió la alarma cuando el INP devolvió la lista de aceptados por el hospital Las Cruces de Bilbao, pero con la ausencia de varios nombres. Se averiguó que los rechazados por el INP lo fueron por tener antecedentes políticos, sin hacer caso a sus condiciones profesionales. Esto ya originó la huelga de Bilbao, pero la situación ha vuelto a repetirse en el mes de septiembre al anunciarse que: la selección de todos los MIR la haría un Tribunal Central del INP en Madrid y para solicitar el ingreso en un centro de la SS había que presentar certificado de buena conducta. En los nuevos contratos, además, se les hacía firmar un compromiso de no asistencia a reuniones y asambleas, bajo pena de expulsión.

En esta huelga coordinada a nivel nacional se han presentado las siguientes reivindicaciones: exclusión de criterios extraacadémicos para la selección; elección de aspirantes en cada hospital por tribunales paritarios formados por médicos fijos y MIR; derecho de reunión; contrato laboral; mejoras salariales

(16.000, 18.000, 20.000 y 22.000 ptas). La huelga, que se inició el 7 de octubre en la clínica Puerta de Hierro de Madrid, se prolongó hasta el 22, cuando el INP anuló todas las sanciones de suspensión de contratos de docencia y aceptó los dos primeros puntos de la plataforma de reivindicación, comprometiéndose a estudiar los demás.

Paralelamente a la lucha, y sobre todo en los últimos días, surgieron posturas de los MIR negando la exclusividad de su representación a los Colegios de Médicos. Ello fue por una razón muy clara: este conflicto lo han querido aprovechar el presidente del Consejo General de Colegios de Médicos, Lafuente Chaos y el del Colegio de Madrid, García Miranda, para crear problemas en la medicina de la Seguridad Social y jugar su baza a favor de la medicina privada. Esta maniobra ha sido vista claramente por los MIR, que han dejado clara su postura de apoyo a la Seguridad Social, como forma de medicina socializada, aunque se ha de cambiar su estructuración para que no sirva a los intereses políticos y represivos del régimen.

FASA: HUELGA EJEMPLAR

Uno de los ejemplos más valiosos de la madurez alcanzada por el Movimiento Obrero en este año lo constituye la huelga de FASA-Renault, en Valladolid, protagonizada durante dos semanas por más de 13.000 obreros.

Desde el año pasado se vivía en la fábrica un clima de creciente tensión, producido por haber firmado la parte del jurado de empresa que se negó a dimitir —como pedían los trabajadores— un convenio colectivo que no respondía en absoluto a las reclamaciones unánimes de la base obrera. A partir de aquel momento la inmensa mayoría de los trabajadores tomaron conciencia de a quién servían verdaderamente los jurados y enlaces existentes.

El 30 de Julio se publica la nueva Ordenanza Laboral Siderometalúrgica. De acuerdo con ella las sucesivas asambleas obreras de FASA deciden reclamar las 44 horas semanales de trabajo y el abono de una mensualidad completa en las pagas extras, ambas cosas claramente estipuladas en el texto legal. A la vista de

lo sucedido en la discusión del convenio, se exige la dimisión de los cargos sindicales, tratando de evitar que la empresa manibre nuevamente con ellos.

Ante la negativa de la dirección a todo diálogo, el 27 de Septiembre comienza la huelga, de forma casi total, y el cierre de las fábricas. Los trabajadores denuncian que, no sólo la llamada Autoridad Laboral está al servicio de las empresas, sino que éstas además gozan de total libertad para interpretar en su beneficio, y en contradicción con lo que dice la ley, las disposiciones que les interesan. La huelga de FASA se amplía rápidamente en todas direcciones: se apoya solidariamente a los despedidos de Pakar y Fada, se recibe la solidaridad de numerosas fábricas y organizaciones populares de la ciudad, se establecen contactos con el sindicato francés CFDT para interesar el apoyo de las factorías centrales y en Sevilla los trabajadores de FASA e ISA realizan paros parciales de apoyo y asumen las mismas reivindicaciones.

La necesidad de las mejores condiciones de trabajo reclamadas en esta huelga, salta a la vista. En dos meses se han producido 13 muertos y más de 25 heridos en dos accidentes de trabajo y un incendio. ¿Cómo no pensar en las cadenas inhumanas, en los ritmos infernales de producción, en un sistema industrial que sólo busca obtener más y más beneficios? Por eso los trabajadores de FASA, unidos como un solo hombre, han sostenido su lucha hasta el final. Durante los 14 días de la huelga total la represión ha golpeado con dureza (cargas brutales de la policía, desalojos continuos de las fábricas, 37 detenidos, 187 sancionados, represalias económicas) pero no ha conseguido más que radicalizar la solidaridad y la voluntad combativa de los trabajadores de FASA y de todo el pueblo de Valladolid.

Como señala la propia Asamblea Obrera de FASA, en un extenso análisis sobre la lucha, estas son las consecuencias a deducir: incapacidad del Sindicato y sus estatutos, carácter negativo de la utilización de los medios legales, relación de dependencia de la Autoridad Laboral respecto al gran capital y las empresas, falsedad e injusticia de los tribunales laborales y papel de la policía al servicio permanente del capital.

CARLISMO, HOY

EL PRINCIPE DON CARLOS HUGO EN LA REPUBLICA POPULAR CHINA

Los Príncipes Don Carlos Hugo y Dña. Irene han iniciado un largo viaje político y de estudios a diversos países. En primer lugar se han desplazado a la República Popular China invitados por el gobierno de aquel país.

Se propone Don Carlos en este viaje, además de ampliar las informaciones y estudios que pueda adquirir directamente, establecer una confrontación de la ideología socialista del Carlismo con la de los países socialistas. El socialismo de autogestión y plural que comprende la doctrina carlista, adquiere en estos momentos gran interés; por esta circunstancia preocupa a nuestro líder exponer ante esos países nuestro proyecto político. Sus trabajos, durante el viaje a Chi-

na Popular, irán dirigidos también hacia el estudio de las estructuras sociales y el desarrollo económico y político de aquel país. Los Príncipes se entrevistarán con los principales dirigentes y estadistas de la República Popular China.

Se da la circunstancia de ser los primeros príncipes occidentales, y los primeros representantes de la oposición política española, que visitan este país. A continuación de este viaje a China Don Carlos y Doña Irene se proponen visitar Japón, Méjico y Cuba. A este último país se desplazan también invitados por su gobierno.

MILITANTES DEL PARTIDO, EN CUBA

Varios militantes del Partido Carlista han realizado durante el pasado verano

una extensa visita a la República de Cuba, invitados por los organismos de amistad con los pueblos de aquel país. Durante su estancia tuvieron oportunidad de estudiar ampliamente las transformaciones que se llevan a cabo, especialmente en los sectores de enseñanza, agricultura y construcción de viviendas. Por medio de conferencias y entrevistas conocieron, asimismo, los puntos de vista de las organizaciones populares y sociales de Cuba acerca de los problemas planteados en este momento y de su futuro desarrollo.

Con esta visita se pretende contribuir al conocimiento y análisis crítico en el seno del Partido de la realidad existente en los diversos países socialistas. Con este objeto se elaborará en plazo próximo un amplio informe para su estudio y discusión.